

ALEMANIA

ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL

Situación política y económica

El nuevo Gobierno se reunió el días 10 y 11 de abril en el palacio brandeburgués de Messeberg para determinar el programa de trabajo de los próximos meses. Tras el primer encuentro, la canciller alemana se mostró optimista con poder alcanzar el pleno empleo en 2025, subrayando la responsabilidad común del Gobierno y de los agentes sociales. Anunció la aprobación el 2 de mayo del nuevo presupuesto 2018, que no prevé un nuevo endeudamiento. Asistieron como invitados al encuentro, el presidente de la Confederación de las Asociaciones Patronales Alemanas (BDA), Ingo Kramer, y el presidente de la DGB, Reiner Hoffmann, el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg y el presidente de la CE, Jean Claude Juncker.

El SPD eligió el 22 de abril como presidenta del partido a Andrea Nahles, hasta ahora líder del grupo parlamentario, convirtiéndose con ello en la primera mujer que lidera esta formación con 154 años de historia. Nahles, que sucede en el cargo a Martin Schulz, obtuvo el voto de 414 de los 631 delegados presentes, lo que significa un 66,35 % del total de votos válidos en el congreso extraordinario celebrado en la ciudad de Wiesbaden. Como futuros objetivos del SPD, Nahles anunció su intención de querer lograr el control del capitalismo digital y de querer gravar más a los grandes consorcios de la economía digital. Asimismo, prometió un debate abierto acerca de una reforma de la prestación no contributiva por desempleo.

La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, reafirmaron el 19.4 su propósito de consensuar la "refundación" de la Unión Europea, pese a admitir sus diferencias sobre su nuevo diseño y convencidos de que podrán presentar su propuesta conjunta el próximo junio. Para Macron, el acento debe ponerse en el término "inversiones", mientras que Merkel insistió en la necesidad de dar con "soluciones justas", en que se combinen el sentido de la "responsabilidad compartida" y los "esfuerzos nacionales". Los puntos de partida son distintos, pero no faltará "voluntad" en ninguno de los dos Gobiernos para llevar adelante tan "titánico trabajo", aseguró el presidente francés. Merkel, por su parte, señaló que los grandes logros de los últimos años, como las reformas emprendidas contra la crisis global en Portugal, España e Irlanda, resultaron de una "sabia combinación" entre las responsabilidades asumidas de cada uno de los países afectados y la solidaridad europea.

En el encuentro celebrado el 27.4 entre la canciller y el presidente de los EE.UU. trataron principalmente el conflicto comercial entre EEUU y Europa así como el futuro del acuerdo con Irán. El Gobierno alemán cuenta con que EEUU imponga aranceles sobre el aluminio y el acero a partir del 1 de mayo.

Alemania exportó en febrero de 2018 mercancías por un importe de 104.700 millones de euros, un 3,2% menos en comparación con el mes anterior en términos desestacionalizados y corregidos los efectos de calendario y un 2,4% más en comparación interanual. Asimismo importó mercancías por un valor de 86.300 millones de euros, un 1,3% menos en comparación con el mes anterior en términos desestacionalizados y corregidos los efectos; +4,7% en comparación interanual. El balance comercial, tan criticado internacionalmente, descendió con ello de 19.800 millones en febrero 2017 a 18.400 millones en febrero de 2018. La principal razón del descenso ha sido el crecimiento de las importaciones. Las importaciones desde los países de la UE ascendieron a 49.900 millones y desde los países fuera de la UE a 36.400 millones, con lo que en este último grupo fue más notorio el aumento de las importaciones (+5%) que el de las exportaciones (+0,9%).

Según resultados provisionales de la Oficina Federal de Estadística publicados en abril, los presupuestos públicos principales y extraordinarios alcanzaron por cuarta vez consecutiva un superávit, que en 2017 alcanzó los 61.900 millones de euros (2016: 25.800 millones). La recaudación fue de 1.429.700 millones de euros (+5,8%) y gasto público de 1.367.900 millones (+3.1%). El nuevo ministro de Finanzas, Olaf Scholz (SPD), cree que la tasa de endeudamiento público podría situarse en 2019 en el 58% y cumplir con ello lo previsto por el pacto de estabilidad, mientras que en el año en curso se situará en el 61%.

Según estimaciones del Gobierno dados a conocer a finales de abril, la economía alemana crecerá en 2018 un 2,3% y el 2019 un 2,1%. Con ello reduce ligeramente los pronósticos provisionales para 2018 adelantados en enero, según los cuales se esperaba un aumento de 2,4%. La cifra de ocupados aumentará en un millón de personas hasta el 2019 y el descenso del desempleo batirá un nuevo récord.

Los principales institutos de investigación económica presentaron el 19.4 su informe semestral sobre la economía alemana. Revisan al alza en 0,2 puntos su pronóstico del crecimiento económico que pasa al 2,2% en 2018 y al 2,0% en 2019. Avanzan un incremento de la recaudación estatal de 37.800 millones en 2018 y 34.700 millones en 2019. Recomiendan al Gobierno usar estos fondos adicionales para estabilizar las finanzas públicas y renunciar a incrementar el gasto social, critican expresamente las mejoras previstas para las pensiones públicas. Avanzan un incremento

de la cifra de ocupados de 44,3 millones en 2017 a 45,3 millones en 2019. La tasa de desempleo pasará del 5,7% al 4,8%. Por otro lado, el Instituto de Investigación Económica y de Coyuntura alemán (IMK), cercano a los sindicatos, publicó esta semana que el indicador de riesgo de una recesión económica en Alemania ha subido considerablemente desde el 6,8 hasta el 32,4 % debido a la amenaza de una guerra comercial entre China y Estados Unidos.

Seguridad social

El Consejo de Ministros aprobó el 23 de abril el Reglamento que regula la subida de las pensiones presentado por el Ministerio Federal de Trabajo para los más de 20 millones de jubilados. A partir del 1 de julio, se aplicará un aumento del 3,22% en el oeste y del 3,37% en el este. Con ello las pensiones en este del país alcanzan el 95,85 de las del oeste (antes: 95,7%). La equiparación total del 100% de ambas regiones podría alcanzarse a más tardar en 2024

La prensa informó a comienzos de abril que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Heil, podría estar preparando dos paquetes de medidas para incrementar algunas de las pensiones. El primer paquete entraría en vigor el 1 de enero de 2019 y supondría un incremento sustancial de las pensiones para madres y las de gran invalidez. Un segundo paquete, todavía sin determinar la fecha de entrada en vigor, introduciría la pensión mínima básica y la obligación de los autónomos de contar con un plan de pensiones.

En vísperas de la presentación de la comisión del Gobierno para una propuesta de reforma del seguro de pensiones, el sindicato del metal, con aproximadamente 2.000.000 de afiliados, reclamó el 30.4 del Gobierno un incremento gradual de la tasa de reemplazo de las pensiones. El sindicato propone que el coste de esta medida se reparta a partes iguales entre empresarios, trabajadores y Gobierno. CDU y SPD quieren mantener hasta 2025 la tasa de reemplazo en el 48% y lograr que la cuota social, que en la actualidad se sitúa en el 18,6%, no supere el 20%.

Por su parte, el sector de los seguros propondrá en las próximas semanas un modelo alternativo a los planes privados de pensiones con subvenciones estatales. La Federación de los Seguros Privados anunció a comienzos de abril que antes del verano quiere dar respuesta a las críticas que desde hace años califican estos planes de poco beneficiosos por sus elevados costes y la baja rentabilidad. La canciller había insistido en 2017 que es prioritario desarrollar un modelo nuevo que haga estos planes más atractivos, Las empresas del sector quieren evitar a toda costa que el Gobierno diseñe un modelo propio, tal como vienen proponiendo algunos gobiernos regionales. El sector privado teme que esta solución podría

suponer el fin de los planes subvencionados. Algunos expertos proponen adoptar un modelo similar al sueco, donde el Gobierno saca a concurso la gestión de diversos fondos de pensiones.

El ministro de Sanidad, Jens Spahn (CDU), propuso a comienzos de abril que las cajas de enfermedad recurran a sus fondos de reserva que acumulan 19.000 millones de euros para lograr reducir la cuota al seguro de enfermedad. Las cajas critican la propuesta ya que pondría en situación de desventaja a aquellas con menos fondos, algunas la califican de "expropiación". La prioridad de Spahn será la de ejecutar los acuerdos alcanzados para esta legislatura: volver a la financiación paritaria de la cuota al seguro de enfermedad entre asegurados y empresarios, poner en marcha un programa para contratar 8.000 trabajadores adicionales para la atención a la dependencia y reducir los tiempos de espera para que los pacientes del seguro obligatorio pueden obtener una cita médica.

Spahn propuso además a finales de abril anular buena parte de la deuda del seguro de enfermedad que alcanza los 8.200 millones de euros. Spahn quiere anular en concreto los 6.300 millones de euros que los asegurados voluntarios adeudan al seguro de enfermedad. En la mayoría se trata de autónomos, muchos de ellos sin trabajadores a su cargo, así como cientos de miles de temporeros que dejan de pagar sus cotizaciones sin que los seguros de enfermedad puedan aclarar si han retornado a sus países de origen. Spahn propone que estos asegurados puedan ser dados de baja de oficio a los seis meses; solamente en el sector agrícola se trata de 286.000 personas al año. Asimismo propone reducir a la mitad el salario supuesto sobre el que se calcula la cotización mínima de los autónomos que optan por una afiliación voluntaria al seguro de enfermedad, que pasaría de 2.248 a 1.142 euros mensuales. La cotización mínima se situaría en 171 euros mensuales.

El Gobierno quiere reducir la cuota al seguro de desempleo en 0,3 puntos al 2,7%. Según informó la prensa, la buena situación que atraviesa la coyuntura económica ha incrementado de forma espectacular la recaudación de cotizaciones del seguro. En la actualidad, el Fondo de Garantía del seguro se sitúa en 20.000 millones de euros, expertos creen que incluso tras la reducción de la cuota podría seguir aumentando hasta los 30.000 millones a finales de 2019. Diversos economistas, la patronal y los liberales proponen reducir la cuota en 0,5 puntos y algunos expertos de la CDU sugieren adelantar a julio la reducción de 0,3 puntos. Los sindicatos advierten del riesgo que encierra una reducción excesiva de la recaudación y proponen ampliar la cobertura del seguro.

Mercado de trabajo

El paro registrado descendió en abril en 74.000 personas frente al mes anterior (-7.000 en términos desestacionalizados), registrándose una cifra total de 2.384.000 desempleados (-185.000 en comparación interanual). La tasa de paro fue del 5,3% (-0,2%). También descendió el subempleo a 3.354.000 (-17.000 frente a marzo y -235.000 frente al año anterior). 692.000 personas recibieron ese mes la prestación contributiva por desempleo (-55.000 en comparación interanual) y 4.241.000 la prestación no contributiva (-184.000). La ocupación aumentó en marzo en 32.000 personas en términos desestacionalizados frente a febrero. El número total de ocupados alcanzó los 44,46 millones (+598.000 en comparación interanual). Este crecimiento se atribuye principalmente al incremento de la afiliación a la Seguridad Social que en febrero ascendió a 32,55 millones (+53.000 y +773.000 respectivamente). La demanda de mano de obra siguió creciendo en abril con 784.000 puestos de trabajo vacantes registrados (+78.000 en comparación interanual).

El Gobierno alemán se ha fijado como objetivo alcanzar el pleno empleo para 2025 a través de una estrategia nacional de formación continua y la inversión de 4.000 millones de euros en esta legislatura para volver a incorporar a los parados de larga duración en el mercado de trabajo. Está previsto que el plan de capacitación continua beneficie por ejemplo tanto a aquellas personas sin una formación profesional acabada, como a aquellas que quieran reciclarse profesionalmente, precisó la canciller alemana, Angela Merkel, el 28.4 en su habitual vídeo-mensaje de los sábados.

En 2016 se registró la cifra de abandono de la formación más alta desde los años 90. Según el Informe sobre Formación Profesional 2018 del Gobierno federal aprobado el 18.4 por el Consejo de Ministros, unos 146.000 aprendices rescindieron en 2016 sus contratos de formación, situándose la cuota de abandono de la formación en el 25,8%. En 2017 se firmaron 514.900 contratos de formación (+4.900; +1% frente a 2016). Mientras que la cifra de contratos entre los hombres creció notoriamente (+11.500; +3,7%), se mantiene la tendencia a la baja de los contratos firmados por mujeres en los últimos años (-6.600; -3,3 %). Por primera vez desde 2012 ha crecido el número de nuevos contratos de formación, en términos interanuales el aumento fue del 1,0%.

La prensa se hace eco de los principales resultados de varios informes, publicados a comienzos de abril, sobre el impacto que tendrá la digitalización y la automatización sobre el mercado de trabajo. Un primer informe de la OCDE llega a la conclusión de que el número de puestos de trabajo destruidos por la IA y la automatización será mayor en Alemania que en el resto de los países industrializados. El 20% de los trabajadores

alemanes podría perder su empleo en los próximos 15 a 20 años, otro 36% tendrá que asumir las enormes transformaciones que sufrirían los procesos productivos en los que están inmersos. Un informe realizado por el Centro de Investigación Económica Europea (ZEW), por encargo del Ministerio de Investigación, analiza el impacto de las inversiones realizadas en el ámbito de la digitalización y automatización. Concluyen que las inversiones realizadas entre 2011 y 2016 han supuesto la eliminación del 5% de los puestos de trabajo pero han permitido a las empresas analizadas ganar en competitividad y ampliar sus plantillas, pero el efecto neto en este período habría sido un incremento del empleo en un 1%.

Según un informe del Instituto Alemán de Economía publicado en abril, la falta de personal cualificado reduce el crecimiento económico alemán en casi un 1% al año. En el estudio se afirma que al mercado alemán le faltan actualmente unos 440.000 trabajadores cualificados y que si las empresas alemanas pudieran cubrir este déficit, el rendimiento económico del país aumentaría en un 0,9% o unos 30.000 millones de euros. La deficiencia de trabajadores lleva la capacidad productiva de las empresas al límite y es una razón para que éstas no se decidan a invertir, dice el estudio. La falta de personal es una de las principales preocupaciones de muchas empresas. Según una encuesta a 24.000 empresas de la Confederación Alemana de Cámaras de Comercio e Industria (DIHK), el 60% de ellas cree que la falta del personal cualificado es el mayor riesgo para el negocio, hace 8 años era solo el 16%.

De una respuesta de finales de mes del Gobierno a una interpelación de Los Verdes, se desprende que en la dependencia se encuentran vacantes actualmente unos 25.000 puestos de trabajo de personal técnico especializado (14.785 en geriatría; 10.814 en enfermería). A estos hay que añadir la falta de 15.000 trabajadores auxiliares. Los Verdes hablan de una "crisis de personal cualificado" y critican que las medidas de los últimos años no han surtido efecto y que los 8.000 puestos de trabajo adicionales prometidos por el nuevo Gobierno en el acuerdo de coalición no representan más que "una gota de agua en el océano". Por ello, reclaman aplicar un amplio programa de emergencia que no solo contrarreste la actual falta de personal en el sector, sino que además descongestione completamente la situación de contratación de personal.

A comienzos de abril la Confederación Alemana de Cámaras de Comercio e Industria (DIHK) se pronunció a favor de formar una alianza entre la política y el sector empresarial con el fin de hacer frente a la creciente falta de mano de obra cualificada. Entre las propuesta de su presidente, Eric Schweitzer, se encuentran la cualificación de un mayor número de personas para la vida profesional, mejor equipamiento técnico y de maestros cualificados en las escuelas de FP, incorporación de una

orientación profesional obligatoria en las escuelas e institutos y una actuación en conjunto para poder ofrecer oportunidades a los desempleados sin formación.

Uno de cada nueve jubilados continúa trabajando en Alemania, tres veces más que en el año 2000. Según informa Eurostat, en 2016 un total de 1,4 millones de personas mayores de 65 años contaban con un trabajo. Según un informe publicado esta semana, para muchos la motivación dista mucho de ser la falta de ingresos a través de pensiones, sino el deseo de mantener una actividad laboral. El porcentaje de jubilados altamente cualificados que trabajan es especialmente elevado. El 30% de los jubilados con un bachillerato mantiene una actividad laboral, mientras que solo el 20% de aquellos que tienen un grado escolar básico. Llama la atención la diferencia por sexo. El 28% de los hombres jubilados trabaja, pero solo el 18% de las mujeres.

Relaciones laborales y condiciones de trabajo

La patronal está aumentando la presión sobre el nuevo ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Hubertus Heil (SPD), para lograr la flexibilización de la norma que regula la jornada laboral. Las principales organizaciones empresariales y la Confederación Alemana de Oficios argumentan que la digitalización y la globalización hacen necesarias adecuar las normas a la realidad. La Ley sobre la jornada laboral data de 1994 y prevé que por regla general está será de ocho horas y solamente en casos excepcionales podrá ampliarse hasta las diez horas. Asimismo, prevé un período de descanso de, al menos, once horas.

Según informa Eurostat a comienzos de mes, en 2017 los costes laborales aumentaron un 2,6% en Alemania, 0,6 puntos por encima de la media de los 28 Estados miembro. El coste laboral medio para el empresario se situaba en 34,10 euros por horas, mientras que el coste medio en el conjunto de la UE fue de 26,80 euros. Alemania ocupa el séptimo lugar por detrás de Dinamarca (42,50 euros), Bélgica (39,60), Luxemburgo (37,60) y Suecia (36,60). Las diferencias entre el coste en Alemania y el resto de la UE es especialmente pronunciado en las empresas industriales (Alemania: 40,20 euros, media UE: 27,40), sector en el que el coste solamente es superior en Bélgica y Dinamarca. En el sector servicios la media europea es de 26,60 euros mientras que en Alemania se sitúa en 31,5 euros.

Un informe del Instituto de la economía alemana (IW Köln), publicado el 30.4, analiza la importancia de los acuerdos colectivos. En 2016 solamente el 37,5 % de los trabajadores estaban sujetos a un convenio colectivo de ámbito regional o nacional y el 11,2 % a un convenio de empresa, otro 4,6% recibía retribuciones independientes de las tablas

salariales, estando sujetos a un convenio, y los salarios de otro 9,9% se regía por lo acordado por convenio sin que la empresa estuviera sujeta a dichos acuerdos. Las diferencias regionales son evidentes: el porcentaje de trabajadores en la parte oriental regulados por convenio regional o nacional es inferior al de la parte occidental mientras que se dan con mayor frecuencia los convenios de empresa. Por sexo, edad y tipo de jornada, las diferencias salariales son mínimas. No obstante, parece significativo que solamente el 31,6% de los trabajadores con un mini-empleo estaban sujetos a lo acordado por la negociación.

El sindicato de la industria química quiere lograr una subida salarial del 6% y doblar las pagas extras por vacaciones. La patronal advierte del efecto negativo que podría tener un acuerdo demasiado ambicioso, mientras que los sindicatos remiten al crecimiento de la facturación de las empresas del sector y reclama hacer a los trabajadores partícipes de los beneficios que éstas están obteniendo. Además esperan lograr un mayor grado de autonomía para los 580.000 trabajadores del sector a la hora de distribuir la jornada laboral. La patronal estaría dispuesta a estudiar pero, al igual que hizo la patronal del metal, solamente si el sindicato accede a implantar un sistema que permita ampliar la jornada a aquellos trabajadores que así lo deseen.

Patronal y sindicatos acordaron el 17 de abril un convenio colectivo para los 2,3 millones de empleados de las Administraciones Públicas del Estado y los municipios. Se aplicará un aumento salarial en tres fases: percibirán con efecto retroactivo desde el 1 de marzo de 2018 un 3,19% más de salario, a partir del 1 de abril de 2019 se aplicará un aumento del 3,09% y a partir del 1 de marzo de 2020 del 1,06%. Además los empleados de los niveles salariales más bajos percibirán una paga única de 250€. Los aprendices recibirán en 2018 y en 2019 un aumento salarial de 50€ respectivamente. La suma de gastos adicionales para la Federación y los municipios asciende así a casi 10.000 millones de euros en los próximos dos años y medio. El periodo de validez de este convenio colectivo será de 30 meses. Los sindicatos demandaban en un principio un aumento salarial del 6%, pero 200€ como mínimo; durante un periodo de solo 12 meses.

En 2015 entró en vigor la Ley para la participación equitativa de mujeres y hombres en los órganos de gestión de la empresa privada y pública; no obstante, desde entonces apenas ha mejorado la presencia de la mujer en las juntas directivas de empresa. Por ello, la ministra de la Familia, Tercera Edad, Mujer y Juventud, Franziska Giffey, anunció a comienzos de abril su intención de imponer severas sanciones a las empresas que no alcancen el objetivo de la cuota femenina establecida por ley en sus juntas directivas y otros órganos directivos.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Hubertus Heil (SPD), presentó en abril un proyecto de ley que contempla el derecho de los trabajadores a regresar de un trabajo con jornada parcial a una jornada completa a partir de 2019. Si no fuera posible la prolongación de la jornada, el empleador estará obligado a aducir los motivos. La CDU/CSU y el SPD ya quisieron regular la vuelta a la jornada completa en la anterior legislatura pero no consiguieron ponerse de acuerdo en los detalles. En 2017 trabajaban más de 15 millones de personas con una jornada parcial.

Un informe de la OCDE publicado en abril señala que en Alemania los salarios de las personas solteras soportan una carga fiscal y cotizaciones sociales más altas que el resto de los países industrializados. Los descuentos suman el 49,7% en el caso de un trabajador soltero, 0,2 puntos más que en 2016 e inferior solamente a Bélgica, donde los descuentos suman un 53,7% (OCDE: 35%). Por otra parte, el informe de la OCDE destaca que las aportaciones de los empresarios a la Seguridad Social están por debajo del 20% y por lo tanto son inferiores a parte de los países industrializados. La patronal comenta este informe reclamando una reducción de las cotizaciones sociales y advierte del riesgo que encierra el cambio demográfico, sobre todo para la estabilidad del sistema de pensiones.

Según informó el Gobierno el 30.4 en respuesta a una pregunta del grupo de La Izquierda, a finales de 2016 el 17,7% de los trabajadores sujetos a cotizaciones tenía salarios íntegros mensuales inferiores a 2.000 euros. Las diferencias regionales son considerables. En Alemania oriental este porcentaje se situaba en el 14,7%, en la parte oriental alcanzaba el 31,2%. Destaca Meklemburgo-Pomerania Occidental con el 36,7%, el menor porcentaje corresponde a Baden-Wurtemberg con 12,4%. Tanto ese grupo parlamentario como el dirigente del SPD reclaman un incremento del SMI de los 8,84 euros actuales a 12 euros por hora.

Asuntos sociales y servicios sociales

Este mes la prestación no contributiva ha sido motivo de debate. La asociación *Paritätischer Wohlfahrtsverband*, una de las mayores organizaciones del tercer sector, reclamó del Gobierno una reforma en profundidad de la prestación no contributiva por desempleo. Su presidente, Ulrich Schneider, cree que el momento es idóneo para lograr un incremento considerable de la prestación que, en su opinión, debería pasar de los 416 euros mensuales a 571 euros, tomando en consideración las declaraciones del nuevo ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, quien reconoció que la prestación aboca a algunos beneficiarios a una situación de riesgo de pobreza. Schneider recuerda que para muchos de los beneficiarios esta prestación no es transitoria sino que la situación de necesidad se cronifica por las dificultades de acceder al mercado de

trabajo. La prensa cree poco probable que el Ministerio de Trabajo acceda a esta reclamación pero no descarta que sí asuma algunas de las reivindicaciones planteadas por Schneider y su organización como por ejemplo la de modificar el actual régimen de sanciones de los beneficiarios de la prestación no contributiva, especialmente duro para los menores de 25 años. Parte de la CDU defiende el actual sistema señalando que el concepto de pobreza que maneja el tercer sector exagera la problemática.

Según datos publicados por la Agencia Federal de Empleo, el 10.4 en septiembre de 2017 el 55,2% de las 4,3 millones de personas con capacidad laboral que percibían la prestación no contributiva por desempleo tenía origen migratorio (2013: 43%). La Agencia de Empleo justificó esta evolución con la dificultad que tiene la mayoría de los refugiados para entrar en el mercado laboral tras la resolución de su solicitud de protección internacional debido a la falta de conocimientos del idioma y de formación, por lo que pasan a percibir la prestación básica. Unos 2.052.000 niños o jóvenes menores de 18 años (prácticamente uno de cada siete) dependían en junio de 2017 de la prestación no contributiva, un 5,2% más que en junio de 2016 e incluso un 8% más que hace cinco años. La cuota es todavía mayor entre los niños menores de tres años: uno de cada seis niños vivía en junio de 2017 en una familia perceptora de la prestación básica para demandantes de empleo. La agencia atribuye el aumento a la creciente cifra de familias extranjeras que son asesoradas por los *jobcenter* y perciben la prestación no contributiva por desempleo y desempeña un papel decisivo en ello la creciente cifra de refugiados, que tras el cierre de su procedimiento de asilo y la realización de los cursos de integración pasan a percibir la prestación si no encuentran inmediatamente un trabajo.

En 2017 se impusieron 952.840 sanciones a los beneficiarios de la prestación no contributiva por desempleo, produciéndose un ligero aumento del 1,5% (+13.700) en comparación interanual. En relación con la cifra total de perceptores, la cuota de sanciones se mantuvo sin cambios en el 3,1%. La causa del 75% de ellas fue la incomparecencia a citas a pesar de los recordatorios por SMS. Según los datos publicados por la Agencia Federal de Empleo en abril, en febrero percibieron 4,95 millones de personas la prestación no contributiva; de ellos, 4,26 millones tenían capacidad para trabajar. El ministro federal de Trabajo, Hubertus Heil, se mostró abierto a incrementar el importe de la prestación con el fin de "mejorar las perspectivas de vida de las personas".

A finales de abril la policía realizó registros en diversas ciudades en Renania del Norte-Westfalia en una acción concertada con las autoridades municipales, los organismos competentes para la prestación no contributiva y el organismo de aduanas. Se trataba de desmantelar una red dedicada al fraude organizado y masivo de la prestación no

contributiva por desempleo. Podrían estar implicados varios miles de ciudadanos rumanos y búlgaros, que podrían haber estado cobrando esta prestación en su modalidad de complemento salarial a pesar de haber estado trabajando o personas con contratos de miniempleo ficticios, formalizados con el único fin de cobrar la prestación compensatoria.

Migraciones

El ministro de Cooperación y Desarrollo, Gerd Müller (CSU), manifestó en abril su intención de ampliar la dotación económica del programa de repatriación "Perspectivas en el propio país", puesto en marcha en marzo de 2017, con unos 500 millones de euros anuales (dotación actual: 150 millones). La idea es ayudar a los inmigrantes a regresar y a afianzarse en su tierra, por ejemplo asesorándoles en la creación de empresas o con programas de FP o empleo. Los países de destino serán Albania, Kosovo, Serbia, Túnez, Marruecos, Gana, Senegal, Nigeria, Irak, Afganistán y Egipto. Müller destacó también el éxito alcanzado con el programa "*Cash for Work*" que ofrece perspectivas a refugiados sirios en su país y con el que se ha conseguido en los últimos dos años introducir a más de 140.000 personas en el mercado laboral en sus países de origen.

El nuevo ministro de Interior, Horst Seehofer (CSU), anunció a comienzos de abril su intención introducir restricciones más severas a la reagrupación familiar de personas con protección subsidiaria. El proyecto de ley prevé permitir la reagrupación familiar solo a cónyuges, a padres de niños menores y a refugiados menores solteros y excluye del ámbito de aplicación a perceptores de la prestación no contributiva por desempleo y a aquellas personas que no hayan contraído matrimonio en el país de origen. El documento permite además denegar la reagrupación a familiares de personas sospechosas de terrorismo, a predicadores del odio y dirigentes de organizaciones ilegales. La CDU apoya la propuesta de Seehofer, pero ésta ha generado mucho descontento en el SPD, partido que no tiene la intención de divergir de los resultados de las negociaciones de coalición. El ministro de Exteriores insta a la Unión a mantener los acuerdos adoptados y afirmó que el SPD no aprobará un proyecto de ley que reduzca la cifra de reagrupación acordada de 1.000 personas al mes. El Parlamento y la Cámara Alta aprobaron en marzo suspender la reagrupación familiar para personas con protección subsidiaria hasta mediados de julio, fecha en la que deberán entrar en vigor las nuevas disposiciones. El debate entre CDU, CSU y SPD acerca de la reagrupación familiar amenazaba con lastrar la coalición de Gobierno. Mientras que los cristianodemócratas insisten en que se ha acordado la entrada del país de 1.000 reagrupados al mes y que un cupo no agotado en un mes no puede ser transferido al siguiente, los socialdemócratas afirman que el acuerdo especifica una cifra de 12.000 reagrupados al año.

Varios países de la UE, entre ellos Alemania, anunciaron a comienzos del mes que no desean seguir financiando el acuerdo adoptado con Turquía en materia migratoria. Estos argumentan la falta de finalización o iniciación de proyectos. Además en su carta a la UE critican la falta de transparencia y desean saber exactamente de donde proceden los fondos con los que se financia la ayuda a Turquía

Un estudio del Instituto de Economía (IW) publicado en abril incide en la dependencia de Alemania de la inmigración. Según el estudio, actualmente unas 200.000 personas de los países balcánicos que viven ya desde hace tiempo en el país tienen un trabajo con cotizaciones la Seguridad Social en Alemania. Más del 66% de los albanos, más del 60% de los bosnios y la mitad de los macedonios que viven en Alemania tienen un trabajo regular. Desde el final de la crisis del euro disminuye la inmigración de la UE a Alemania y por ello en el futuro aumentará aún la dependencia de los inmigrantes procedentes de países no europeos, afirmó el experto del instituto, Wido Geis. Falta personal cualificado especialmente en informática, técnica y ciencias naturales. Por ello, Geis propone traer al país de forma selectiva a inmigrantes con la correspondiente cualificación básica, para luego completarla en la empresa o universidad y motivar a este colectivo a que se quede de forma permanente en el país.

La Oficina Federal de Estadística publicó el 12 de abril las actuales cifras sobre la población extranjera en Alemania correspondientes a 2017, año en el que alrededor de 10.624.000 personas residentes en Alemania eran extranjeras, el 12,5% de la población. El número de extranjeros aumentó en 585.000 personas (+5,8%) respecto al año anterior, cifra idéntica a la registrada en 2013, antes del inicio de la crisis de los refugiados. Esta evolución se debe principalmente a dos factores: al claro descenso de la inmigración desde países fuera de la UE y al constante aumento de la inmigración desde países de la UE, especialmente desde los países adheridos desde 2004. Unos 5.920.000 extranjeros procedían de terceros países (+163.000; +2,8%); el débil aumento se atribuye ante todo a una migración neta baja desde los principales países de origen de solicitantes de asilo. La migración neta desde los países de la UE aumentó notoriamente hasta las 439.000 personas (2016: 277.000). Destacan Polonia (85.000), Rumanía (85.000) y Bulgaria (45.000). En total había registrados 178.010 españoles (2016: 163.560), 92.365 hombres y 85.645 mujeres.

Alemania confirmó a mediados de abril que en 2018 y 2019 acogerá a 10.200 refugiados del programa de reasentamiento de la UE, un compromiso heredado de la anterior legislatura. Se trata de personas especialmente vulnerables o traumatizadas y menores no acompañados. La prensa cree que el nuevo ministro del Interior, Horst Seehofer (CSU),

no podrá negarse a cumplir este compromiso aunque contradiga el cambio hacia una política migratoria más restrictiva. Seehofer recalcó que esta cifra sería tomada en cuenta para calcular el tope de nuevas entradas al país, que se podría situar entre 180.000 y 200.000 personas. El número de personas reasentadas en 2018 sería de 4.600 y en 2019 de 5.600.

El Gobierno informa en respuesta a una interpelación del grupo parlamentario de La Izquierda que a finales de febrero la cifra de refugiados que esperan más de un año a que se resuelva su solicitud de protección internacional se ha reducido a 13.000. La Oficina Federal de Migraciones acumulaba a mediados de 2016 medio millón de solicitudes sin resolver. Las solicitudes de solicitantes recién llegados se tramitan en una media de tres meses, si se suman los casos sobrevenidos la duración media es de diez meses. Los menores no acompañados tienen que esperar una media de 13 meses y medio a recibir una resolución. La oposición crítica este aspecto, que considera intolerable teniendo en cuenta que entre el 80% y el 90% de las resoluciones son favorables. Sin embargo, la oposición también afirma que la reducción de la duración media no puede ser el único objetivo ya que se resentiría la fundamentación de las resoluciones.

El Tribunal Federal de Cuentas ha anunciado que examinará los procedimientos de trabajo de la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF). El trasfondo de esta medida son las sospechas de corrupción contra la directora de la oficina regional en Bremen, acusada de haber manipulado resoluciones de solicitantes de protección internacional y haber concedido asilo en numerosos casos sin cumplirse los requisitos necesarios. Junto a la directora de la oficina, las autoridades también tienen en su punto de mira a otros empleados, a los que no se les ha abierto hasta el momento procedimiento disciplinario para no entorpecer la investigación.

El Consejo de Expertos de Fundaciones Alemanas para la Integración y Migración presentó el 24 de abril en Berlín su informe anual, en el que exhorta al Gobierno a que apruebe una normativa que reúna todas las regulaciones en materia de migraciones siguiendo el ejemplo del Código Social. Los expertos critican especialmente la inmensidad de normas legales y reglamentos aprobados a lo largo de los años, así como la excesiva complejidad de competencias en materia migratoria en Alemania, que califican de "auténtica jungla". Solicitan ampliar las posibilidades de inmigración para la mano de obra cualificada y reducir los obstáculos para la homologación de títulos profesionales. La Unión y el SPD pactaron en el acuerdo de coalición elaborar un reglamento que controle y regule la inmigración en el mercado laboral, orientándola en las necesidades de la economía alemana.

La propuesta del nuevo ministro de Interior, Horst Seehofer (CSU), de concentrar a los solicitantes de protección internacional en centros de acogida ha sido duramente criticada por los delegados de un congreso del sindicato de policías GdP celebrado a finales de abril. Los delegados son contrarios a "mantener encuartelados y aislados durante años a los solicitantes de protección internacional" y advierten del riesgo de que se produzcan situaciones de agresividad y frustración. Temen que las personas alojadas en estos centros no tendrán acceso a cursos de integración y apenas dispondrán de medios económicos. El ministro critica el posicionamiento del sindicato y en especial que hayan calificado de "campos" estos centros, un término que en opinión del ministro sugiere asociaciones negativas en Alemania. Seehofer, que en agosto o septiembre quiere poner en marcha los primeros centros, cree que los críticos desconocen los detalles de la propuesta.

En 2017 no pudieron llevarse a cabo 20.869 expulsiones de solicitantes de asilo rechazados, muchas de ellas fueron anuladas por los länder, la razón más habitual es que no pudo efectuarse la entrega. Unas 9.200 expulsiones fracasaron el día de vuelo porque los inmigrantes no fueron localizados, disponían de un justificante médico o de un recurso judicial.